



Eduardo Moyano Estrada
(IESA-CSIC)

Hacia un nuevo agrarismo

■ En este artículo, su autor analiza el discurso “agrarista” y su evolución desde una perspectiva histórica. Comienza analizando, en primer lugar, los principios ideológicos del agrarismo tradicional, dominante en los países europeos hasta final de la década de 1970, e impulsor de las políticas agrarias nacionales y de la PAC. En segundo lugar analiza la crisis del discurso agrarista ante las externalidades negativas de los modelos intensivos de agricultura y el avance del ecologismo. Finalmente, analiza la reacción actual del sector agrario, distinguiendo, de un lado, las actitudes de repliegue corporativista y, de otro, la emergencia de un nuevo agrarismo, abierto al establecimiento de alianzas con otros grupos sociales y económicos.

Palabras clave:

Agricultura | Ideologías agrarias | Sindicalismo | Políticas agrarias | España | Unión Europea.

La agricultura es un sector tan importante que su gestión no puede dejarse solo en manos de los agricultores, pero tampoco puede gestionarse adecuadamente sin ellos. Esta frase, que me gusta utilizar con frecuencia, refleja muchas de las cuestiones que están hoy en el debate sobre la función de la agricultura en temas como el abastecimiento de alimentos, la lucha contra el cambio climático, la restauración de la biodiversidad vegetal y animal, el problema de la despoblación rural, el reto de la digitalización o el desafío de la renovación generacional.

Son cuestiones que interesan no solo a los agricultores, sino a la sociedad en su conjunto; de ahí que se sienta conernida toda la población y no solo la agrícola.

Pero los agricultores son un elemento esencial del territorio, por lo que sin ellos muchas de esas cuestiones no podrían ser gestionadas de manera adecuada.

No es este, por tanto, un debate sectorial, sino integral, un debate de país, en el que nos jugamos la competitividad de nuestro sistema alimentario, la preservación de nuestros paisajes, la sostenibilidad de nuestro medio ambiente y la cohesión de nuestros territorios.

Auge y caída del “agrarismo tradicional”

Durante gran parte del siglo XX, y hasta comienzos de los años 1980, el “agrarismo” era el discurso que predominaba en la mayor parte de los países europeos occidentales, manifestándose de muy diversas maneras (en el folklore, la gastronomía, la política...).

Según este discurso, la agricultura, y el mundo rural asociado a ella, representaba los valores esenciales de nuestra cultura, y la actividad agraria era valorada por su carácter estratégico en la producción de alimentos, justificándose así que fuera objeto de una especial protección a través de las políticas agrarias. Se consideraba, además, que el sector agrario era la base del desarrollo de la economía de los países no solo como receptor de la maquinaria y de los paquetes tecnológicos procedentes de la industria, sino también como donante de gran parte de la mano de obra destinada a satisfacer las demandas de trabajadores en las nuevas plantas y factorías industriales.

En ese largo periodo, los agricultores formaban el grupo social mayoritario en muchas comunidades locales, y sus organizaciones representativas eran reconocidas como interlocutores privilegiados en las



A escala de la UE, el agrarismo se manifestaría con nitidez cuando se creó la PAC (Política Agraria Común) a principios de los años 1960 y se implementó su estructura institucional. En ella, el COPA-COGECA adquiriría un estatuto privilegiado de interlocutor directo ante la DG-Agricultura de la Comisión Europea, participando activamente en el sistema de gobernanza de la PAC (comités consultivos agrícolas)

instancias gubernamentales, tanto nacionales como europeas. Los ministerios de Agricultura encarnaban lo más granado del discurso “agrarista”, formando, junto al sindicalismo agrario, un *lobby* poderoso en las instancias políticas de toma de decisiones.

Su importancia como sector básico de la economía y el peso del coste de los alimentos en la inflación hacían que la agricultura recibiera un trato especial en las instancias políticas, quedando excluida de las reglas de liberalización del comercio internacional marcadas por el GATT y luego por la OMC (Organización Mundial del Comercio).

Países como Francia hicieron del “agrarismo” su principal seña de identidad en ese periodo, y su agricultura impregnaba entonces no solo la economía, sino también la cultura, convirtiéndose además en el centro de la agenda política y en el motor que impulsó el desarrollo de otros sectores de la economía durante los “treinta gloriosos” (1950-1980). El sistema electoral francés, basado en pequeñas circunscripciones (casi 600 *arrondissements*, equivalentes a nuestras

comarcas), le daba una sobrerrepresentación al voto rural, otorgándole, por tanto, al sector agrario una capacidad de influencia en las esferas políticas muy por encima de su peso real en la economía. Dicha influencia se plasmaba en la participación de la profesión agrícola en la cogestión de la política agraria, una profesión encarnada en el sindicalismo mayoritario representado por el tándem que formaban la FNSEA y el CNJA, reconocidos por el gobierno como representantes del sector e interlocutores en las dinámicas de concertación.

Otros países europeos, como Italia o Alemania, no llegaron a tal extremo, pero la presencia del discurso agrarista era bien visible en los debates políticos y sociales de aquellas décadas. En el caso español, las políticas económicas desarrolladas durante la segunda etapa del franquismo y los primeros gobiernos de la transición democrática (1960-1980) se inspiraban también en el discurso agrarista de la modernización productiva, desarrollando servicios de extensión agraria e impulsando la mecanización,

la transformación en regadío de las zonas de secano y el consiguiente trasvase de mano de obra desde las áreas rurales a las regiones industriales (españolas o europeas).

A escala de la UE, el agrarismo se manifestaría con nitidez cuando se creó la PAC (Política Agraria Común) a principios de los años 1960 y se implementó su estructura institucional. En ella, el COPA-COGECA adquiriría un estatuto privilegiado de interlocutor directo ante la DG-Agricultura de la Comisión Europea, participando activamente en el sistema de gobernanza de la PAC (comités consultivos agrícolas).

Con el citado proceso de modernización agraria, impulsado por los avances científicos y tecnológicos de la “revolución verde” (1960-1970), se dio una situación paradójica. De un lado, aumentó de forma exponencial la producción agrícola y ganadera, hasta el punto de que, en muchos países europeos, entre ellos España, se alcanzó la suficiencia alimentaria y se acabaron los años de penuria.

Pero, por otro lado, comenzó en la opinión pública un proceso gradual de banalización de la agricultura, perdiendo el valor casi sagrado que se le había conferido durante siglos. Para las nuevas generaciones, criadas en la sociedad del bienestar, el lazo secular entre producción agraria y consumo de alimentos comenzó a deshilacharse, diluyéndose ese vínculo emocional y afectivo que se tenía con la actividad agraria y con todo lo que la agricultura y el mundo rural representaban.

Además, la aparición de las primeras externalidades negativas en los modelos intensivos de agricultura mostró sus efectos perniciosos sobre el medio ambiente, así como la responsabilidad de esos modelos en la erosión de los suelos, el deterioro del paisaje y el agotamiento de los recursos naturales, con el consiguiente desequilibrio de los ecosistemas. También comenzaron a manifestarse en el mercado mundial de alimentos los primeros efectos disruptivos de las medidas proteccionistas de la PAC (precios de garantía, incentivos a las exportaciones...).

La agricultura se convirtió, por ello, en el centro de las críticas de ciertos grupos de opinión: sobre todo, de las organizaciones ecologistas (haciendo responsable al sector agrario del deterioro del medio ambiente y

los ecosistemas), pero también de los movimientos “altermundistas” (atribuyéndole a la agricultura y las políticas agrarias europeas la causa de la pobreza en los países en vía de desarrollo).

Asimismo, el cambio cultural experimentado en las sociedades urbanas (con la expansión de valores asociados, por ejemplo, al bienestar animal y la protección del medio ambiente), así como las nuevas demandas de los consumidores (respecto a la calidad y salubridad de los alimentos) y la creciente percepción de los territorios rurales como espacios de ocio y recreación, contribuyeron a que la agricultura en tanto actividad productiva perdiera relevancia en la escala de valores de la población europea.

La influencia del ecologismo

Eso explica que en las tres últimas décadas, y como reacción al predominio secular del agrarismo, se haya ido imponiendo un discurso alternativo cada vez más contrario al desarrollo productivista de la agricultura. Es un discurso basado en los principios del ecologismo militante y construido en los medios urbanos, aunque con estrechas alianzas con los movimientos de la agroecología y con los grupos que practican la agricultura ecológica (muchos de ellos de origen también urbano).

Es un discurso que algunos califican de “antiagrarista” en la medida en que no solo excluye a los agricultores vinculados a los modelos convencionales e intensivos de agricultura, sino que incluso los desprecia (*agribashing*) por considerarlos beneficiarios de unas obsoletas e injustificables políticas corporativas de carácter asistencial, atribuyéndoles, además, la responsabilidad del deterioro del medio ambiente, la contaminación de las aguas y el agotamiento de los recursos naturales en su afán por extraer de la naturaleza el mayor beneficio económico posible.

Este discurso, en el que algunos analistas ven ciertos rasgos de supremacismo ecologista, se aprovecha de la pérdida de influencia del agrarismo y se alimenta además de varios hechos: la reducción de la importancia de la agricultura en el PIB nacional; el descenso de la población agrícola, que pasa a ser una minoría entre otras en muchas co-



Los ministerios de Agricultura han dejado de formar parte del *lobby agrario* para transformarse en departamentos encargados de gestionar un sector cada vez más complejo y diverso. Ello les obliga a abrir las puertas de la interlocución a otros grupos de intereses (industria, comercio, gran distribución, redes de desarrollo rural, organizaciones ecologistas, consumidores...) en detrimento del monopolio que tradicionalmente ha ejercido el sindicalismo agrario en esta área de la representación

munidades locales; la expansión de los modelos industriales en el sector agrario (olivares, viñedos y frutales en seto altamente mecanizados; macrogranjas y explotaciones ganaderas hiperintensivas...); la aplicación de la robótica en las labores agrícolas y su gradual externalización a empresas de servicios; la distancia creciente entre productores y consumidores en el marco de la cadena alimentaria; la disminución de la influencia política de las élites agrarias, tanto a nivel local como nacional y europeo; el cambio de valores culturales en las sociedades desarrolladas hacia el predominio de valores “posmaterialistas” que, como he señalado, sacralizan el medio ambiente y mitifican la naturaleza como un espacio prístino que habría sido expoliado por el ser humano a través de actividades como la agricultura y la ganadería.

Todo ello se refleja en la creciente ampliación de la comunidad de intereses asociada a la agricultura, formando parte de

ella, además de los agricultores, otros grupos de intereses distintos de los agrarios: biólogos de la conservación, cazadores, propietarios forestales, fondos de inversión, empresarios promotores de actividades diversas (turismo rural, deportes de naturaleza...), inversores en el área de las energías renovables, consumidores... Es una comunidad de intereses amplia y diversa en la que los agricultores y sus organizaciones perciben que están perdiendo la influencia que históricamente habían tenido, sintiendo por ello frustración, incompreensión y desprecio, cuando no acoso, por parte de esos otros grupos.

Este sentimiento se manifiesta en ocasiones tales como las siguientes: la declaración de un territorio rural como zona ZEPA (red Natura 2000) o reserva de la biosfera, con las consiguientes restricciones a la actividad agraria; la prohibición de la caza de ciertas especies consideradas dañinas para la cabaña ganadera, como el lobo; las crecientes limitaciones a la utilización de de-



terminados herbicidas (como el glifosato); la autorización de importaciones de productos agrícolas procedentes de países terceros; los crecientes controles administrativos de la actividad agraria, percibidos por los agricultores como muestra de desconfianza hacia ellos...

Este proceso de cambio va, además, acompañado en el ámbito político-institucional de reformas significativas en la estructura de gobernanza. En este sentido vemos cómo los ministerios de Agricultura han dejado de formar parte del *lobby agrario* para transformarse en departamentos encargados de gestionar un sector cada vez más complejo y diverso. Ello les obliga a abrir las puertas de la interlocución a otros grupos de intereses (industria, comercio, gran distribución, redes de desarrollo rural, organizaciones ecologistas, consumidores...) en detrimento del monopolio que tradicionalmente ha ejercido el sindicalismo agrario en esta área de la representación.

En algunos países se ha llegado incluso a la práctica desaparición de los ministerios de Agricultura, quedando las competencias en materia agraria disueltas en un magma diverso de áreas competenciales. En otros países, aunque se haya mantenido la estructura tradicional de la gobernanza agraria, la realidad es que se van trasladando en un goteo constante materias relacionadas con la agricultura a otros departamentos mi-

nisteriales, de tal modo que la regulación del sector agrario acaba siendo, de hecho, objeto de intervención de otras estructuras de gobernanza.

En la UE, el sistema de gobernanza de la PAC también ha cambiado y ya no es patrimonio del sector agrario, sino diverso y compartido por otros grupos de intereses. De hecho, la DG-Agri no tiene ya como exclusivo interlocutor al COPA-COGECA, sino que comparte la interlocución con otros grupos agrarios (como las organizaciones sectoriales o las de la producción ecológica). Por su parte, el proceso de codecisión (trílogos) para la aprobación de las políticas comunes abre la puerta a la participación activa del Parlamento Europeo, y no solo a su comisión de agricultura (ComAGRI), sino también a la de medio ambiente (ComENVI), cada vez más influyente en todo lo relacionado con la PAC.

Los agricultores perciben todo ello como una pérdida, como una falta de reconocimiento de la función cuasi sagrada que creen aún desempeñan en las sociedades modernas en todo lo relacionado con la producción de alimentos. La alta valoración social recibida por su contribución al abastecimiento alimentario durante la pandemia Covid-19 les satisface sin duda, pero la sienten más como un reconocimiento de la cadena alimentaria en su conjunto que del sector productor, que ve cómo muchos agri-

cultores siguen afectados por los mismos problemas que antes del coronavirus (precios bajos, altos costes de producción, asimetría en su relación con la industria y la gran distribución, escasa rentabilidad de las explotaciones, competencia de los productos foráneos...).

Es por todo ello que los agricultores se sienten no solo no reconocidos suficientemente por la sociedad, sino también ignorados, cuando no despreciados por lo que califican de supremacismo de los grupos ecologistas, grupos que, en opinión de muchos agricultores, solo se relacionan con la naturaleza desde el confort de las ciudades y los despachos académicos de los intelectuales y profesores universitarios. Muchos agricultores perciben, además, que estos grupos tienen cada vez mayor influencia en las instancias políticas de decisión, tal como observan en temas tales como la orden de inclusión del lobo en la lista de especies protegidas, aprobada a espaldas del sector ganadero, la normativa sobre purines o el etiquetaje de Nutriscore, por citar solo algunos ejemplos.

Asimismo, la aprobación, sin consultar al sector agrario, del documento sobre el Pacto Verde Europeo, y en especial la estrategia “De la granja a la mesa”, está causando temor entre los agricultores, debido a las fuertes restricciones que puede suponerles en materia de uso de fertilizantes o plaguicidas.

Es un temor que se ha visto agravado con el interés de la Comisión y el Parlamento de incluir los objetivos de dicho Pacto Verde en las negociaciones de la nueva PAC, en detrimento de las ayudas directas.

Por su parte, el tema de incluir la “condicionalidad social” como un añadido a las ya fuertes exigencias ambientales (*greening*) para el cobro de las ayudas del primer pilar de la PAC es percibido también por los agricultores como una nueva injerencia y una prueba evidente de desconfianza respecto del sector productor. El sector la considera, además, una medida innecesaria por cuanto que todos los titulares de explotaciones están obligados a cumplir la legislación laboral, y el no hacerlo les haría incurrir en flagrante ilegalidad a perseguir por la Inspección de Trabajo.

En ese contexto pueden observarse dos formas de reacción por parte de los agricultores y sus organizaciones: una, de repliegue corporativista y, otra, de apertura hacia un nuevo agrarismo.

Repliegue hacia un agrarismo corporativista

Encontramos, en efecto, una reacción defensiva, de repliegue corporativista, de cerrar filas ante lo que perciben como un acoso desde fuera del sector agrario. Es una reacción que puede verse como una especie de resentimiento ante lo que perciben como supremacismo de los ecologistas, sintonizando políticamente con el populismo de derecha (FN en Francia, Vox en España), cuyos partidos encuentran en el malestar agrario un buen caldo de cultivo, un buen caladero de votos. Pero es también una reacción que amenaza con romper la unidad interna de los sindicatos agrarios mayoritarios, tal como ya está ocurriendo con la emergencia de nuevos sindicatos, receptivos al discurso del agrarismo corporativista.

Su actitud contraria al proceso de globalización, su reivindicación de la soberanía nacional en materia de protección en fronteras o el ensalzamiento de los valores tradicionales asociados al mundo rural (como la caza) son elementos de este discurso corporativista, que se ha manifestado de forma virulenta en países como Francia (con el movimiento de los “chalecos amarillos” de cla-

ro corte *poujadista*) y que en otros países se ha expresado de forma más pacífica en las grandes manifestaciones de finales de 2019 y principios de 2020.

Es evidente que esta reacción corporativista no encaja con el signo de los tiempos, ni con las grandes tendencias de cambio económico y cultural, y que corre el riesgo de verse enquistada en un programa de reivindicaciones sin salida. Pero es también evidente que refleja el malestar que existe entre amplios grupos de agricultores. Es un malestar que no puede, ni debe, ser ignorado, ni por los responsables políticos ni por los representantes del sindicalismo mayoritario, a fuer de ver un sector agrario en permanente estado de revuelta, con los disruptivos efectos colaterales que ello puede ocasionar.

Es, además, un movimiento de reacción emocional (tipo “*bonding*”, según la terminología del enfoque del capital social), difícil de contrarrestar con razones, y al que solo le valen los hechos: mejores precios, reducción de costes, protección de los productos nacionales, relajación de los controles medioambientales, eliminación de las prohibiciones a las actividades tradicionales, levantamiento de las restricciones a la actividad agraria... Esa es su fuerza en tanto banderín de enganche para muchos “agricultores al límite”, más también su debilidad en tanto son reivindicaciones imposibles de canalizar y de aceptar por parte de los poderes públicos, cuyas competencias son más limitadas de lo que creemos.

Bases de un nuevo agrarismo

De otro lado, vemos una reacción no corporativista, sino abierta y en constante búsqueda de alianzas con grupos y movimientos sociales no vinculados directamente con la actividad agraria, pero presentes de alguna forma en los debates sobre la agricultura y los territorios rurales. Son agricultores de muy diversas características sociales y económicas, pero que se esfuerzan por renovar el discurso agrarista intentando comprender la complejidad de los tiempos actuales; que asumen los retos y desafíos que se les plantea en materia de innovación tecnológica, cambio climático, digitalización y renovación generacional; que apuestan por

el acceso de las mujeres a la titularidad de las explotaciones y a los órganos directivos de las organizaciones profesionales y cooperativas, y que son conscientes de que no pueden afrontarlos ellos solos encerrándose en un mundo rural que ya no existe. Es por ello una reacción que intenta construir puentes con otros grupos y que aspira a crear relaciones de confianza y capital social tipo “*bridging*”.

Son agricultores que, además de productores, se sienten parte de la sociedad; que comparten las bondades y deficiencias del sistema de bienestar; que observan las dificultades de sus hijos e hijas para sacar adelante sus proyectos de vida, y que están decididos a participar en los debates sobre las grandes cuestiones que afectan hoy a la agricultura. Perciben que son cuestiones que no son ya patrimonio exclusivo del sector agrario, sino que forman parte de las preocupaciones e intereses de la sociedad en su conjunto.

Reconocen sus problemas en tanto productores, pero están decididos a buscar el modo de solucionarlos en alianza con otros grupos sociales. Ven, por ejemplo, la PAC como una red de seguridad para la renta de los agricultores, aunque no entienden que su deriva ambientalista se haga en detrimento de las ayudas directas, lo cual no les impide valorar positivamente el programa agroambiental o la figura de los “ecosquemas”. Ven también la PAC como una oportunidad para impulsar fórmulas de cooperación con la comunidad científica para la resolución de problemas específicos en el marco de los “grupos operativos” de la AEI, pero eso no les impide criticarla. Por ejemplo, critican que no se les ofrezcan alternativas a los productores para que puedan adaptarse al marco regulatorio del nuevo Pacto Verde en materia de fertilizantes o plaguicidas, por lo que abogan por participar en su implementación en vez de rechazarlo sin más, exigiendo de la Comisión Europea la fijación de periodos transitorios.

Son asimismo conscientes de la asimetría de los agricultores dentro de la cadena alimentaria, pero apuestan por una mejor vertebración de la producción a través de formas asociativas más eficientes abogando por la negociación con el resto de los actores del sistema alimentario (industria, distribución...) en el marco de las denominaciones

de origen y de las estructuras interprofesionales, y mediante mejores y más eficaces fórmulas contractuales.

Saben además que gran parte de nuestra agricultura tiene vocación exportadora y depende de la existencia de mercados abiertos y transparentes. Asimismo, apuestan por introducir nuevas prácticas agrícolas (producción integrada, agricultura de conservación...), así como tecnologías de precisión para reducir los costes (energéticos y productivos) y mejorar la eficiencia y la competitividad de las explotaciones.

Además, impulsan formas innovadoras de relación con los consumidores, como los circuitos cortos, y diversas modalidades de interacción con la sociedad civil y el mundo cultural (campañas de apadrinamiento a determinadas especies de árboles, programas etnológicos en el campo de la olivicultura y la viticultura, ferias de arte, degustaciones gastronómicas a pie de granja...).

No es esta, por tanto, una reacción corporativista y excluyente como la otra, sino consciente de la complejidad del escenario en que les ha tocado vivir a los agricultores y abierta a la búsqueda de alianzas con otros grupos sociales (por ejemplo, la participación de algunas organizaciones agrarias en el Foro Rural Mundial o el acuerdo de UPA

con la empresa Lidl para la promoción del aceite de oliva a precios dignos, por encima de los costes de producción).

En esa búsqueda de alianzas se presentan ante los demás y ante la sociedad con el orgullo de ser y sentirse agricultores, pero no desde la pretendida supremacía moral del agrarismo corporativo, sino desde la conciencia de que la agricultura es un asunto de todos y no solo de los que trabajan la tierra y gestionan lo mejor que pueden sus explotaciones. Sentirse agricultores no les ciega ni les hace caer en la ensoñación de verse diferentes, ni tampoco les impide sentirse ciudadanos que forman parte de una comunidad más amplia de valores compartidos.

Reflexiones finales

Entre el repliegue corporativista de unos y el agrarismo abierto y renovado de otros discurren hoy los debates sobre el papel a desempeñar por la agricultura ante los grandes retos que tiene la UE y que tiene España como país. Y todo ello a la espera de que se implemente la nueva PAC pos-2021, se aprueben los Planes Estratégicos, finalice el periodo de pandemia y sepamos aprovechar

los fondos de recuperación y resiliencia (*next generation*) procedentes de la UE.

En ese contexto es más necesario que nunca renovar las bases del discurso agrarista, realizando la importancia de la agricultura en el bienestar de la sociedad y en el desarrollo y cohesión de los territorios, pero haciéndolo no desde un repliegue hacia valores de un mundo ya pasado, sino desde una apertura hacia el futuro, con todas sus contradicciones y oportunidades.

Para ello es importante que ese discurso encuentre receptividad en los grupos sociales a los que se dirige y en las correspondientes instancias políticas, transformando las palabras en hechos. Precisamente por no ser un discurso emocional, sino construido sobre la base de las razones y los argumentos, necesita que su esfuerzo de convicción se traduzca en resultados tangibles para poder así contrarrestar el discurso corporativista que se extiende entre los agricultores.

Por eso, es preciso que los poderes públicos sean especialmente sensibles a lo que representa este nuevo agrarismo, reconociéndole con hechos el importante papel que desempeñan las organizaciones profesionales en la articulación del sector agrario y en la necesaria interlocución social y política. ■